

Santiago, tres de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que los abogados Teresa Rivera Espinosa y Erick Acosta Durán, en representación del demandante, en causa RIT T-5-2024, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, deducen recurso de queja en contra de los miembros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ministros señora Ana María Cienfuegos Barros, señora Claudia Lazen Mazur y señor Patricio Martínez Benavides, fundado en que dictaron con falta y abuso grave la sentencia de cinco de marzo de dos mil veinticuatro, que confirmó la de instancia de diecinueve de enero del año en curso, que declaró la caducidad de la acción de despido injustificado interpuesta en forma subsidiaria, así como el cobro de indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicios y recargo legal.

Sostiene, en síntesis, que los recurridos infringieron lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, pues la terminación de la relación laboral se produjo el 25 de julio de 2023; luego el 26 de julio interpuso reclamo ante la Inspección del Trabajo; el 10 de agosto del mismo año se celebró el respectivo comparendo, e ingresó el 12 de noviembre medida prejudicial, lo que determina que, al haber planteado reclamo administrativo, el plazo para accionar corresponde al de 90 días hábiles, y no al de 60 días hábiles como lo declara la resolución impugnada.

Segundo: Que al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalan que confirmaron la resolución apelada, compartiendo los fundamentos del tribunal a quo, ya que, si bien, el término de caducidad se suspende durante el período de tramitación del reclamo efectuado por el trabajador ante la Inspección del Trabajo, a la fecha de la medida prejudicial ocurrida el 12 de noviembre de 2023, habían transcurrido 74 días desde la separación laboral encontrándose caducado el plazo de 60 días a que se refiere el artículo 168 del Código del Trabajo.

Añadieron que la demanda se dedujo el 4 de enero de 2024, es decir 84 después de la terminación, y que la interpretación difiere de la sostenida por la reclamante, pero ello no implica que incurrieran en falta o abuso al dictarla.

Tercero: Que el recurso de queja está reglado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, bajo el epígrafe *“De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”*, en tanto que su acápite primero, que lleva el nombre de *“Las facultades disciplinarias”*, contiene el artículo 545, que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su



prosecución, siempre que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, por lo que para su procedencia se requiere que la magistratura al dictar tal clase de resoluciones incurra en un error de mucha entidad o importancia, único contexto que autoriza la aplicación de una sanción disciplinaria.

Cuarto: Que, del examen de los antecedentes, se advierte que no hay discrepancias entre la recurrente y los recurridos en lo que atañe al sustrato fáctico de la decisión, esto es, en cuanto a las fechas de término de contrato, de inicio y término de la gestión administrativa realizada ante la Inspección del Trabajo, y de interposición de la medida prejudicial.

Quinto: Que, en consecuencia, la discusión versa sobre la correcta interpretación de lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo que dispone que *“el trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare”*, agregando en su inciso final que *“el plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá cuando, dentro de éste, el trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha Inspección. No obstante, lo anterior, en ningún caso podrá recurrirse al tribunal transcurridos noventa días hábiles desde la separación del trabajador”*.

La disposición precedente, como lo indican los recurridos, prevé en forma expresa que el plazo para interponer la demanda es de 60 días hábiles y que éste se *“suspenderá”* por el lapso en que se haya desarrollado la gestión administrativa, lo que, en el caso, ocurrió entre los días 16 de julio y el 10 de agosto de 2023, resultando luego la reanudación del cómputo, procedimiento conforme al cual debe concluirse que la demanda fue efectivamente planteada con posterioridad al vencimiento del plazo que la legislación consagra.

Sexto: Que, por consiguiente, es posible concluir que los jueces recurridos, al confirmar la resolución apelada, no incurrieron en falta y abuso grave, habida consideración que sea la medida prejudicial o la demanda, el plazo contemplado en el artículo 168 del Código del Trabajo, a la época de su interposición había transcurrido con creces, no obstante, el reclamo administrativo substanciado ante la Inspección del Trabajo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se **rechaza** el recurso de queja deducido en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de San



Miguel, ministros señora Ana María Cienfuegos Barros, señora Claudia Lazen Mazur y señor Patricio Martínez Benavides.

Acordada con el **voto en contra** de la abogada integrante **Sra. Rojas**, quien estuvo por acoger el recurso de queja y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución dictada por los ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la sentencia de diecinueve de enero último, que declaró la caducidad de la acción de despido injustificado, recargo legal e indemnización prevista en el artículo 168 del Código del Trabajo, disponiendo, en su lugar, que fue interpuesta dentro del término legal, ordenándose que el tribunal *a quo* debe dar curso a la demanda y a la prosecución del procedimiento por el juez no inhabilitado que corresponda, teniendo para ello presente los siguientes fundamentos:

1°.- Que, es necesario tener en consideración que el procedimiento de tutela laboral se encuentra regulado en el párrafo 6° del Título I del Libro V del Código del Trabajo. A su vez, si la vulneración de los derechos fundamentales tiene lugar con ocasión del despido, la denuncia debe deducirse en el plazo de sesenta días contados desde la separación del trabajador, efectuando el artículo 489 del Código del Trabajo en su inciso segundo, un reenvío a la regla del artículo 168 del estatuto laboral, resultando aplicable la regla de excepción relativa a la posibilidad de suspensión de tal plazo.

2°.- Que, la acción de despido injustificado deducida con la acción de tutela de derechos fundamentales debe ser interpuesta en términos subsidiarios a esta última, tal como ordena el artículo 489 del Código del trabajo en su inciso séptimo. Por consiguiente, queda sujeta a los plazos establecidos para la acción de tutela de derechos fundamentales.

3°.- Que, el artículo 168 dispone en su último inciso, que *“el plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá cuando, dentro de éste, el trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha Inspección. No obstante, lo anterior, en ningún caso podrá recurrirse al tribunal transcurridos noventa días hábiles desde la separación del trabajador”*.

4°.- Que, para determinar el correcto alcance de dicha normativa, es menester recordar que, en materia laboral, las normas procesales deben ser comprendidas integrando de manera concreta los principios inspiradores que justifican la existencia de tal disciplina, presidida, especialmente, por el principio tuitivo o protector, y que uno de los basamentos más sensibles en este ámbito, se vincula con el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos, en cuanto consecuencia evidente del



reconocimiento constitucional de lo que la doctrina y el derecho convencional y comparado denomina como derecho a la tutela judicial efectiva, de especial relevancia en el contexto de la protección del derecho de los trabajadores.

Tal concepto se alza como fundamento esencial de todo Estado de Derecho, garantizado expresamente por nuestra Carta Fundamental en el numeral 3° de su artículo 19, que reconoce la prerrogativa universal de igual protección de la ley, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, y el derecho a un justo y racional procedimiento, garantía que, además, encuentra como contrapartida orgánica los principios rectores de la actividad jurisdiccional consagrados en el artículo 76 del texto constitucional, específicamente el de inexcusabilidad, que impone a los jueces el deber imperativo de otorgar un pronunciamiento de mérito sobre la controversia que legalmente se le plantee, sin poder excusarse de hacerlo.

5°.- Que, de este modo, toda interpretación que limite de alguna manera el acceso a la posibilidad de obtención de un pronunciamiento judicial que adjudique un derecho dubitado, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el numeral 26° del artículo 19 de la Carta Fundamental, máxime en un contexto de excepcional sensibilidad e importancia como el del derecho del trabajo, que se vincula con la esencia misma del ejercicio de la jurisdicción, en cuanto función tutelar de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento, que, dado su rol protector, debe en lo posible evitar salidas incidentales que impidan un pronunciamiento de mérito.

6°.- Que, de esta manera, una interpretación armónica de los preceptos y elementos mencionados, como asimismo, del principio *in dubio pro operario*, permite concluir que el artículo 168 ya citado contiene una regla especial, mediante la cual el plazo para deducir las acciones a que se refiere, como también la de tutela laboral por infracción de derechos fundamentales, se sujeta a la posibilidad de suspensión de su cómputo, en la medida que intervenga reclamo administrativo, lo que provoca, en los hechos, la extensión de dicho término, sin poder sobrepasar los noventa días hábiles.

Lo anterior, se ve reforzado con el propio tenor literal de la disposición, toda vez que al finalizar el inciso final del mencionado artículo 168 del Código del Trabajo, ocupa la expresión “No obstante lo anterior...”, denotativo de oposición o diferencia, que se traduce que, si se reclama administrativamente, el señalado plazo se extiende hasta los noventa días hábiles contados desde el término de la relación laboral.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Rol N° 10.638-2024.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Diego Simpértigue L., señora María Soledad Melo L., la Ministra Suplente señora Eliana Quezada M., y las Abogadas Integrantes señoras Leonor Etcheberry C. e Irene Rojas M. No firman el Ministro señor. Simpértigue y la Ministra Suplente señora Quezada, no obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar haciendo uso de su feriado legal el primero, y haber cesado en su suplencia la segunda.. Santiago, tres de julio de dos mil veinticuatro.



En Santiago, a tres de julio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

